

omissão só serão sentidos, de maneira mais forte, nos próximos anos, quando se adicionarão aos da carga tributária, que já atingiu os níveis dos países industrializados, mas sem a qualidade dos serviços públicos naqueles países. Qualquer sociedade no mundo, geralmente, pouco se entusiasma com reformas estruturais mais abrangentes, mesmo amplamente consideradas como necessárias, como no caso da previdência. Além disso, para os eleitores mais ricos, pode ter pesado mais, em seu julgamento, a estabilidade econômica preservada. Já no caso dos sindicatos, parece que prevaleceu uma visão pragmática de se adequar à orientação do “seu governo” e, para as famílias pobres, os programas sociais do governo (como Bolsa-Família, as Farmácias Populares, ProUni etc.), junto com o aumento do SM, seguramente, fizeram a diferença. Acresce a tudo isso o inegável carisma do presidente, cuja imagem está acima do seu partido e de seu governo, fato também reconhecido pela oposição, como resume o líder tucano no Senado: “É difícil lutar contra uma pessoa de tanto apoio popular”.

Se os eleitores brasileiros decidirem dar continuidade ao governo Lula, esperamos que ele possa dar continuidade também à estabilidade macroeconômica do país e, ao mesmo tempo, iniciar uma nova fase de reformas estruturais profundas nas áreas da previdência, do sistema judiciário e político. Dessa maneira, ele abriria espaços para investimentos pesados nas áreas da educação, saúde e da infra-estrutura, descortinando novos caminhos para um desenvolvimento sustentável apto a concretizar efetivamente o lema do governo Lula: “Brasil – um país de todos”.

Christiane Ströh: Mestrado em economia internacional (Dipl. Volkswirtin) e estudos em ciências políticas na Universidade de Tübingen. Desde 2005 doutoranda e docente no Ins-

tituto de Estudos Latinoamericanos da Universidade Livre de Berlim, com uma tese de doutorado sobre as mudanças atuais nos mercados microfinanceiros latino-americanos. E-Mail: christiane.stroeh@gmx.de.

Juan Agulló

Venezuela: Desde Dónde, Hacia Dónde

La controvertida *Revolución Bolivariana* inquieta. Sustentada en unos precios del petróleo que, desde 1999, se han cuadruplicado, promueve rupturas de fuerte contenido simbólico e innegable ambición (geo)política. Su mentor, el presidente Hugo Chávez, se someterá a finales de año a una reelección casi segura. ¿Realmente tan segura?

Petróleo: progreso, dependencia externa y exclusión social

Los puntos de partida para un análisis del caso venezolano remiten a cierta especificidad. La explotación del petróleo a gran escala –excepcional en América Latina– fue un hecho consumado a partir de la imposición, en 1961, de un inédito consenso intraoligárquico. Este último fue viable porque coincidió con la expansión posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los elevados precios del crudo contribuyeron a cambiar, en apenas veinte años, la faz de Venezuela: de rural a urbana; de agrícola a petrolera y de estancada a dinámica.

Pero la explotación del petróleo también tuvo su lado amargo: incrementó la subordinación externa. Así, mientras que otros países del área apuntalaban los cimientos –posteriormente perdidos– de un desarrollo relativamente autónomo, la

influencia estadounidense en Venezuela creció hasta límites insospechados. El Estado moderno nació, como consecuencia de ello, bajo el signo de la desproporción. El clientelismo retroalimentó, en dicho marco, otro rasgo característico de la Administración Pública venezolana: la ineficiencia.

Hasta la devaluación de 1983 dicha característica quedó más o menos opacada por un vigoroso crecimiento económico que, en todo caso, alumbró una modernización segmentada, heterogénea y zigzagante. Los petrodólares monetarizaron, no en vano, un progreso labrado alrededor de una amalgama de sociabilidades oligárquicas adaptadas al contexto petrolero. Durante décadas y mientras que los precios del crudo estuvieron altos, en Venezuela hubo mucho dinero pero poco capital; alternancia pero poca democracia...

El régimen político que precedió a Chávez se caracterizó por las apariencias: su carácter, en teoría inclusivo, no sólo se fue desmoronando a medida que los rendimientos petroleros comenzaron a resultar decrecientes, sino que fue devalando un carácter excluyente que, en su vertiente más extrema, asumió formas represivas. Sólo durante el *Caracazo* de 1989, por ejemplo, fueron asesinadas más de dos mil personas. Fue la primera vez que algo así trascendió al extranjero quebrando, de golpe, el mito de la *Venezuelan Exception*.

Internamente, desde mucho antes, la legitimidad social de la IV República —y por ende, la base social del consenso político existente— se había venido ajando. Había contribuido a ello, sin duda, una exclusión que, desde 1983, había crecido exponencialmente. La brusca bajada de los precios del petróleo y la subsiguiente aplicación de políticas económicas monetaristas habían contribuido a llevar la situación hasta límites insospechados y desconocidos, en especial, para los venezolanos más jóvenes.

Hoy en día, a pesar del *fenómeno Chávez*, sigue existiendo poca claridad con respecto a los efectos del neoliberalismo en Venezuela. El hecho de que el endeudamiento externo fuera menor que el de otros países del entorno y el de que jamás tuviera lugar una intervención militar ultraderechista no quieren decir que al país no le fueran impuestos *planes de ajuste*. Sus consecuencias fueron devastadoras: espectacular deterioro de las condiciones de vida y, como efecto colateral, una vertiginosa descomposición del tejido sociopolítico.

En pocos años la desigualdad degeneró en una exclusión alimentada por una renta petrolera incapaz, ya, de drenar sus beneficios hacia las capas más bajas de la población. En dicho contexto, la retirada del Estado de terrenos que tradicionalmente había controlado propició el desgaste de casi todas las instancias de intermediación. La política social, por ejemplo, llegó a perder su viejo carácter paliativo. La ingobernabilidad adquirió, como consecuencia de ello, un carácter cada vez más estructural, menos contingente.

El resultado fue una severa crisis de dominación: los Gobiernos neoliberales, presionados por las instituciones financieras multilaterales e incapaces de controlar a la petrolera nacional (PDVSA), vieron reducido su margen de maniobra. Un cierto patrimonialismo se apoderó entonces del aparato del Estado envenenando aún más, si cabe, el clima social: la confianza desapareció y un sentimiento de provisionalidad —e incluso, de derrotismo— se instaló entonces entre los venezolanos.

La producción del malestar

Aunque bajo el neoliberalismo un malestar creciente recorrió América Latina, dicho fenómeno, en Venezuela, resultó

especialmente intenso y por ende, peculiar. No hay que olvidar la situación de partida: un PIB que –durante los años setenta– llegó a ser como el de Italia. Como resultado de ello –a medida que fueron pasando los años– el inconformismo se fue articulando a dos niveles claramente diferenciados (podría decirse, incluso, que contrapuestos): el de los sectores intermedios por un lado y el de los populares, por el otro.

En el primero de los niveles citados, los profesionales liberales y los intermediarios sufrieron un brusco deterioro en su poder adquisitivo y en su seguridad pública y social. La desorientación primó y el miedo entró en escena: fue entonces cuando aparecieron cercas y rejas. Tras ellas comenzó a cobrar cuerpo la acertada sensación de que el papel sociopolítico de los sectores intermedios ya no era tan fundamental como antaño: sentían presión desde abajo y abandono desde arriba. La movilidad social había desaparecido.

El campo estaba abonado para discursos y actitudes que muchos venezolanos (y casi todos los venezolanistas) creían desterrados: racismo, clasismo, xenofobia, meritocracia, individualismo, antiestatismo... Los partidos políticos tradicionales, en dicho contexto, comenzaron a verse desbordados. Hicieron entonces su mediática aparición –sobre todo en Caracas– nuevos actores como los movimientos vecinales o las asociaciones profesionales. Sus argumentos no lograron, en todo caso, poner en jaque al orden establecido.

El malestar vivido en el ámbito popular, por el contrario, sí lo hizo. Sus orígenes eran muy diferentes: nada de sentimientos; todo realidades. Y sobre todo, un círculo vicioso: exclusión de partida; integración ‘petrolera’ posterior y para terminar –de la mano del neoliberalismo– vuelta a la exclusión. La primera reacción, en general, fue conformista: de la precarie-

dad laboral al desempleo y de ahí, a actividades de subsistencia como la venta ambulante. A diferencia de países del entorno –como Colombia o Ecuador– muy pocos optaron por la emigración.

Ello contribuyó a (re)concentrar el malestar orientándolo *hacia arriba*. Provocó, además, unos niveles de competencia horizontal por los recursos que explica las elevadísimas cotas que llegó a alcanzar la violencia social (sobre todo joven y urbana) a mediados de la década de los noventa. Pero no todo fue competencia: durante esos años también hubo decididos intentos por asumir la deuda social que estaba generando un Estado cada vez más replegado en dos actividades básicas: producción petrolera y represión política.

Las nuevas sensibilidades sociales nacieron de la interacción de tres actores: los grupos religiosos, ligados al *cristianismo de liberación*, a las sectas protestantes e incluso a la santería; las *sensibilidades progresistas*, ligadas a la masonería, al ámbito universitario y a luchas sociales más o menos aisladas y una *entente popular*, que hizo de la intuición su modo de vida y de la creatividad, el embrión de una estructura social de supervivencia, autogestionaria y crecientemente opositora al Gobierno de turno.

En un contexto de degradación sociopolítica como el que se viene describiendo casi cualquier chispa hubiera bastado para desencadenar un incendio. Fue lo que ocurrió en 1988/1989. Lo primero fue la abrumadora elección de Carlos Andrés Pérez. El malestar social latente, ligado al recuerdo de los *años dorados* de su primera presidencia (1974-1979), influyó en el caudal de votos que obtuvo a una sola vuelta: el mayor hasta ahora –incluidas las dos elecciones de Chávez, no el referéndum– en la historia de Venezuela.

Pero el encantamiento duró poco. En su toma de posesión, Pérez anunció un

plan de ajuste que develó las intenciones últimas de un sistema que pretendía refundarse transitando de una especie de social-democracia al neoliberalismo. Cuando la población comenzó a percibirlo, los acontecimientos se precipitaron: las protestas –devenidas en algaradas– se expandieron rápidamente. El malestar popular y los peores temores de los sectores intermedios, convergieron, de pronto, en forma de violentos motines urbanos...

La producción del cambio

La revuelta conocida como *Caracazo* duró casi una semana y fue reprimida sin miramientos. El saldo de muertos rondó, como ya se ha visto, los dos mil. La brutal represión marcó un punto de inflexión. Tuvo, para empezar, un efecto demoledor entre venezolanistas y medios de comunicación extranjeros: los acontecimientos fueron portada –circunstancia inaudita– de publicaciones internacionales, mientras que académicos como el estadounidense Daniel H. Levine terminaron diciéndole ‘*Goodbye to Venezuelan Exceptionalism*’.

El *shock* psicológico que se vivió en el país sudamericano también resultó considerable, pues la factura emocional que pasaron los acontecimientos fue enorme. Sus protagonistas tomaron conciencia de la bisoñez política de un movimiento excesivamente dominado por las improvisaciones. Lógico: el malestar social reinante, aunque mayoritario, carecía de un vector político capaz de sintetizar un puñado de reivindicaciones básicas y más o menos colectivas. El *Caracazo* coadyuvó a ello.

Pero la zozobra que provocó el estallido social también reforzó los temores de los sectores intermedios y con ello, su cohesión defensiva. La exigencia del orden reconstruido durante la represión se convirtió en su bandera. En 1989 aún era

pronto para hablar de *identidades antagónicas*, aunque no para hacerlo de *cleavages*. Fue entonces cuando comenzaron a quedar delineados los términos de una polarización definida años más tarde: el resentimiento popular por una parte y enfrente, los temores de los sectores intermedios.

Bajo ese trasfondo la segunda presidencia de Pérez fue un sobresalto continuo. Una vez diluidas las instancias de control social, desintegrados los vínculos societales y establecidos los términos de la confrontación, no se pudo detener el conflicto. Éste jamás asumió una forma bélica porque las *identidades antagónicas* aún eran incipientes. Tres años después, sin embargo, el riesgo de guerra civil no fue retórico: los intentos de golpe de 1992, aunque no lograron derribar al Gobierno de Pérez, sí que tuvieron efectos sísmicos.

Cerraron, no en vano, el círculo psicológico abierto por el *Caracazo*. Fue entonces cuando comenzaron a cuajar, no en vano, las *identidades antagónicas*: las demandas sociales, desde ese año, quedaron cada vez más subordinadas a dos discursos políticos contrapuestos, informalmente estructurados alrededor de las dos instituciones más desarrolladas del país: PDVSA, de orientación marcadamente globalizadora, y el ejército, de inspiración fundacional nacionalista.

Fue en ese contexto de tensión creciente cuando Rafael Caldera –uno de los fundadores de la IV República– asumió un arriesgado reto. Se trató del segundo intento del sistema por refundarse a sí mismo: esta vez, el centro pretendió establecer una relación dialéctica con la periferia y por ende, con el malestar. Pero la apuesta, más que audaz, terminó resultando suicida. La fragilidad política de un Gobierno escogido con un 40% de abstención (¡entre los registrados!) terminó por darle la puntilla política a la IV República.

Entre 1993 y 1998, los niveles de exclusión quizás no aumentaron, pero las *conciencias antagónicas* sí lo hicieron: todos los malestares comenzaron a confluír en un rechazo cada vez más visceral hacia el orden establecido. Los grandes capitales transnacionales y su aliada local –la oligarquía rentista– maniobraron considerando el precedente del *Caracazo*: comenzaron a presionar al Gobierno de Caldera para que acelerara su política de *reformas*, especialmente, en lo concerniente a las privatizaciones.

Dicha política, al venir acompañada de una lógica clientelar, contribuyó a empeorar la situación. El malestar creció sobre la base de una sensación colectiva de expolio. La popularidad de las instituciones mediadoras tradicionales comenzó a desmoronarse. Fue así como la vía hacia lo que Ernesto Laclau llama *lógica populista* quedó abierta: las presidenciales de 1998 iban a jugarse en otro terreno, con otro lenguaje: el vínculo social, reducido a su mínima expresión, solo podía reconstruirse a partir de una retórica igualitarista.

Hubo dos intentos: el de la ex miss universo Irene Sáez y el del militar, ex golpista, Hugo Chávez. En la medida en la que ambos estuvieron en condiciones de representar un malestar social difícilmente encasillable, las dos opciones fueron concurrentes. Durante meses, Sáez lideró las encuestas; pero ganó Chávez porque supo transmitir la idea de una voladura controlada de la IV República, que logró generar seguridad a unos sectores intermedios que, en última instancia, fueron los que terminaron definiendo la contienda en las urnas.

La producción de la revolución

La elección de Hugo Chávez, en 1998, pareció anunciar una tajante retirada de confianza de las sociedades latinoameri-

canas a la xenófila tecnocracia neoliberal, sucesora de las dictaduras de *seguridad nacional*. El caso venezolano presentaba, no obstante, ciertas diferencias con respecto a otros países de la región: para empezar, en tiempos recientes, allí nunca había triunfado un golpe militar. No existía, por consiguiente, un precedente histórico cercano de ruptura del orden institucional aunque sí, una, del económico.

Como consecuencia de la misma, el neoliberalismo había sido progresivamente solapado al consenso intraoligárquico –de inspiración vagamente socialdemócrata– en la matriz del sistema político. Severos *planes de ajuste* habían sido impuestos en 1989 y 1996. En 1999, Chávez decidió variar el rumbo: su gran apuesta fue una nueva Constitución que aspiraba a reinventar el sistema político. Un planteamiento, en principio, no especialmente innovador aunque, en la práctica, sí que aportó elementos novedosos.

La verdadera ruptura simbólica vino dada, en efecto, por el carácter programático de la nueva Carta Magna: algo inédito en una América Latina especialmente propensa a realizar trasplantes jurídicos irrealizables o, cuando menos, inútiles. Mediante su iniciativa, Chávez, alteró el orden de los factores: no partió de una situación ideal sino que se planteó llegar a la misma de la mano del petróleo. Recuperó así, actualizándolo, el mito sobre el que se había sustentado –hasta 1983– el desarrollismo petrolero de la IV República.

Dicha concepción chocaba, no obstante, con un escollo político insoslayable: la nacionalización petrolera impulsada por Pérez en los años 1970, lo que ésta realmente había frenado había sido la dinámica impositiva de la que estaban siendo objeto las multinacionales, sobre todo, estadounidenses. Por eso, la citada nacionalización, para quien realmente trajo beneficios fue para las propias empresas

extranjeras que continuaron explotando el petróleo de manera subcontratada y sin tener que pagar impuestos por no ser, ya, propietarias –formales– de los pozos. A la larga este escenario preparó, además, el terreno para un nuevo tipo de cabildeo encaminado a una reprivatización que, con los años, pretendería ser adornada de una precondition draconiana: garantías jurídicas de que el negocio (y por ende, los ingresos) se mantendrían –*per secula seculorum*– al margen de los vaivenes políticos locales.

En la práctica todo ello quería decir que, en 1999, el proyecto político de Chávez carecía de posibilidades financieras reales para ser implantado: se lo impedía un antidemocrático blindaje de los recursos petroleros. El presidente, sin embargo, no se arredró: apostó a una alteración –sin precedentes– de las relaciones de poder: la guerra civil estuvo cerca. Las *identidades antagónicas* de antaño se convirtieron en los *bandos enfrentados* de hogaño: entre 2001 y 2004 Venezuela vivió un *trienio negro*.

La violencia nunca terminó, como sea, por estallar de forma incontrolada. Se friso el abismo, en todo caso, en dos ocasiones: durante el golpe de Estado de 2002 y durante el cierre patronal de 2002/2003. Pero en 2004 se rompió el equilibrio: la victoria del *chavismo* fue un hecho (lo atestiguaron 5,8 millones de votos). Chávez logró suplir el apoyo de los sectores intermedios (determinante para su elección en 1998) por una movilización –inédita– de los sectores populares, en especial, de aquellos que nunca –o casi nunca– habían votado...

Una redefinición clientelar del gasto social bastó –sobre todo a través de las famosas *misiones*– para propiciar dicho escenario. La situación internacional, mientras tanto, también proporcionó una

inestimable ayuda al *chavismo*: circunstancias como la guerra en Irak o el incremento exponencial de la demanda mundial de crudo redoblaron las posibilidades financieras de un proyecto político que ha convertido al petróleo en la fluctuante palanca de un crecimiento exponencial y un desarrollo, eso sí, algo más discutible.

Actualmente, los intentos del Gobierno por promover cohesión social se enfrentan a obstáculos estructurales: infraestructuras insuficientes, escasa calificación, déficit de institucionalización, ineficiencia administrativa, bajos niveles de participación, etc. Otro problema: aunque desde 2004 prácticamente no existen obstáculos internos, la cuestión del poder continúa sin resolver: la ausencia de estructuras de intermediación dificulta el desarrollo de muchas de las innovadoras propuestas democratizadoras contenidas en la Constitución.

Los avances políticos resultan innegables en términos comparados, pero se enfrentan a escollos. En el pasado, la relación entre *malestar social*, *cleavages*, *identidades antagónicas* y *bandos enfrentados* configuró un proyecto político contrapuesto al régimen precedente pero, sobre todo, al neoliberalismo. Actualmente, el rentismo pareciera reproducir clientelismos y perpetuar fracturas que, en contextos menos propicios, pudieran revolverse. En diciembre, no hay duda, las urnas avalarán a Chávez pero ¿qué tipo de aval?

Juan Agulló, doctor en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales –EHESS– de París, Francia. En la actualidad realiza una investigación postdoctoral para la EHESS y el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, España, sobre “Movilización social y cambio político en la Venezuela contemporánea” (esturion@nodo50.org).